

C.A. de Santiago

Santiago, diez de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia enalzada, con excepción del considerando vigesimosexto, que se elimina.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que los hechos relacionados con los demandantes, señores Luis Eduardo Saavedra Huerta, Luis Osvaldo Rodríguez Rodríguez, René Rosario Aguilera Santander, David Omar Araya Gatica, Gabriel Antonio Aguilera Zeballos y Jorge Eduardo Aguirre Mena, han sido reconocidos por la parte demandada, quien no los ha controvertido, aceptándolos como verdaderos.

SEGUNDO: Que, respecto de las excepciones de "reparación integral" y de prescripción extintiva invocadas por el Fisco, esta Corte concuerda con los fundamentos expuestos en los considerandos octavo a vigésimo segundo y vigésimo quinto de la sentencia apelada, rechazando dichas excepciones. Esto se fundamenta en la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad involucrados y en la responsabilidad que recae sobre el Estado. En consecuencia, se reproducen estos considerandos, desestimando la validez de las excepciones planteadas.

TERCERO: Que, en relación al daño reclamado, y considerando el análisis probatorio contenido en los motivos cuarto, quinto, sexto, séptimo y vigésimo tercero de la sentencia de primera instancia, esta Corte ha determinado que los demandantes Luis Eduardo Saavedra Huerta, detenido el 23 de septiembre de 1973; Luis Osvaldo Rodríguez Rodríguez, detenido el 28 de septiembre de 1973; René Rosario Aguilera Santander, detenido en julio de 1987; David Omar Araya Gatica, detenido el 26 de febrero de 1986; Gabriel Antonio Aguilera Zeballos, detenido el 18 de septiembre de 1980; y Jorge Eduardo Aguirre Mena, detenido en septiembre de 1973, han sufrido un daño físico y emocional de gravedad considerable. Dicho daño es consecuencia directa de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos durante sus detenciones por parte de agentes del Estado, quienes actuaron en flagrante violación de los derechos humanos fundamentales de los afectados. Las pruebas aportadas permiten establecer,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TMDQXQJMZEL

el profundo impacto físico y psicológico que las torturas y vejaciones infligidas generaron en la vida de cada uno de los demandantes.

CUARTO: Que los testimonios, informes psicológicos, certificados y documentos emitidos por la Comisión Valech, así como por entidades como la Vicaría de la Solidaridad y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, referidos en el motivo vigésimo tercero, confirman las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por los demandantes. Dichos documentos describen con detalle los apremios ilegítimos a los que fueron sometidos y las secuelas físicas, psicológicas y sociales que persisten de forma permanente en sus vidas.

QUINTO: Que, conforme se expone en los motivos sexto y vigésimo quinto, los testimonios e informes psicológicos corroboran las torturas y violaciones sufridas por los demandantes. No obstante, es necesario distinguir entre las experiencias individuales de cada uno, considerando la gravedad de los hechos y el impacto físico, psicológico y social experimentado, lo que justifica la fijación de indemnizaciones diferenciadas. A continuación, se presenta un resumen que fundamenta la cuantificación de las indemnizaciones según cada caso:

1.-Luis Eduardo Saavedra Huerta: Detenido el 23 de septiembre de 1973 en La Serena, fue sometido a torturas graves, incluyendo choques eléctricos y simulacros de fusilamiento. Las secuelas incluyen lesiones severas en una mano, insomnio, pérdida de piezas dentales y daño psicológico profundo. La duración y la intensidad de las secuelas, que han deteriorado gravemente su calidad de vida, justifican una indemnización considerable, dada la magnitud de las torturas y su efecto prolongado en su salud física y mental.

2.-Luis Osvaldo Rodríguez Rodríguez: Detenido el 28 de septiembre de 1973 en la minera Mantos Blancos, sufrió fractura de una mano y fue amenazado con la violación de su esposa e hija, lo que le generó un temor constante que lo llevó al exilio. Aunque las secuelas físicas son significativas, el impacto psicológico, especialmente la pérdida de su familia y vida laboral, fundamenta una indemnización relevante, aunque moderada en comparación con otros casos de mayor violencia física.



3.-René Rosario Aguilera Santander: Detenido en julio de 1987, fue torturado con choques eléctricos en los genitales. Las secuelas físicas y psicológicas han sido devastadoras, afectando tanto a él como a su entorno familiar, con pesadillas recurrentes y trastornos psicológicos profundos. Dada la extrema crueldad de las torturas y las repercusiones permanentes en su salud física y emocional, su caso justifica una indemnización elevada.

4.-David Omar Araya Gatica: Detenido en 1986, acusado falsamente de terrorismo y torturado durante ocho meses de encarcelamiento, ha sufrido secuelas emocionales significativas, incluyendo el aislamiento y la ruptura de sus relaciones familiares. Aunque el daño físico es menor en comparación con otros demandantes, el impacto psicológico es considerable y justifica una indemnización acorde al sufrimiento emocional y la injusticia vivida.

5.-Gabriel Antonio Aguilera Zeballos: Detenido en 1980, fue sometido a torturas extremas, incluyendo choques eléctricos y simulacros de ejecución, lo que lo llevó al exilio durante 11 años. Tanto su vida laboral como emocional fueron profundamente afectadas. Si bien su retorno a Ecuador y su recuperación parcial moderan el monto, las secuelas físicas y psicológicas justifican una indemnización alta.

6.-Jorge Eduardo Aguirre Mena: Detenido en 1973, sufrió torturas severas y fue encarcelado por tres años. Las secuelas físicas y psicológicas han sido incapacitantes, afectando su reintegración social y laboral. La duración del encarcelamiento y la gravedad de las torturas justifican una indemnización significativa, dado el impacto prolongado en su vida.

SEXTO: Que, en cuanto a la cuantificación del daño moral, esta Corte, en virtud de la prueba presentada y en concordancia con decisiones adoptadas en causas similares, ha resuelto fijar las indemnizaciones para cada demandante conforme a los antecedentes particulares de cada caso. Los montos reflejarán no solo el tiempo de detención, sino también el grado de sufrimiento físico, emocional y psicológico padecido como consecuencia de las torturas y privaciones de libertad. En esta cuantificación se ha considerado la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, así como la intensidad y permanencia de las secuelas.

SEPTIMO: Que en este sentido, esta Corte ha determinado que los demandantes recibirán las siguientes sumas, en función de la distinción entre



la magnitud de las experiencias vividas y el impacto particular en cada uno de ellos:

1.-Luis Eduardo Saavedra Huerta: En consideración a la severidad de las torturas sufridas, las graves secuelas físicas y psicológicas, y el impacto prolongado en su calidad de vida, se ha fijado una indemnización de \$20.000.000 (veinte millones de pesos).

2.-Luis Osvaldo Rodríguez Rodríguez: Pese a las secuelas físicas moderadas, el alto impacto emocional derivado del exilio y la amenaza a su familia justifica una indemnización de \$30.000.000 (treinta millones de pesos).

3.-René Rosario Aguilera Santander: Las torturas extremadamente crueles y las secuelas físicas y psicológicas severas justifican una indemnización elevada de \$45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos).

4.-David Omar Araya Gatica: Aunque las secuelas físicas son menores, el daño psicológico y el impacto en su vida personal y familiar han sido significativos, lo que fundamenta una indemnización de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos).

5.-Gabriel Antonio Aguilera Zeballos: Debido a las torturas extremas y su exilio prolongado, su caso justifica una indemnización de \$30.000.000 (treinta millones de pesos).

6.-Jorge Eduardo Aguirre Mena: En atención a la gravedad de las torturas y el encarcelamiento prolongado, se ha determinado una indemnización de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos).

7ª) Que el Estado deberá proceder al pago de estas sumas, con los respectivos rintereses conforme al criterio establecido en el motivo vigésimo séptimo de la sentencia y sin reajustes y sin costas.

Por, estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto en el artículo 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara que:

I.- **Se confirma** la sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada por el Noveno Juzgado Civil de esta ciudad, **con declaración**, que el Fisco de Chile debe pagar a los demandantes, las siguientes cantidades:

René Rosario Aguilera Santander: \$ 45.000.000.

David Omar Araya Gatica: \$ 40.000.000.

Luis Eduardo Saavedra Huerta: \$20.000.000.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TMDQXQJMZEL

Luis Osvaldo Rodríguez Rodríguez: \$30.000.000.

Jorge Eduardo Aguirre Mena: \$40.000.000.

Gabriel Antonio Aguilera Zeballos: \$30.000.000.

II.- **Se confirma**, en lo demás, el referido fallo

III.-Se previene que el Ministro señor Mario Rojas González, quien estuvo por confirmar la sentencias, sin modificaciones.

IV.- Se previene que la señora Ministra Marisol Rojas manifestó su disconformidad en relación con la prescripción, por cuanto no adhiere a los fundamentos expuestos en el fallo que se revisa, sino que se basa en los siguientes motivos:

a) Que la acción de indemnización de perjuicios deducida en autos, si bien es precriptible como lo alega el Fisco, es aplicable el artículo 2497 del Código Civil, pero en la especie. Éste renunció a ella, en los términos del artículo 2494 del código Civil, en primer lugar, de acuerdo a la ley N°20.874, y en segundo lugar en forma expresa, por lo expuesto en la contestación de la demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “ Maria Laura Ordenes Guerra y otros con Fisco de Chile”.

b) Que, es por todo lo anterior que, el Fisco de Chile, con su actuar ha renunciado a la prescripción de la acción indemnizatoria, y por tanto la excepción opuesta en estos autos no puede ser acogida.

Redactado por el abogado integrante, señora Candiani y la prevención por su autora.

Regístrese y comuníquese.

N°Civil-11976-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TMDQXQJMZEL

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Marisol Andrea Rojas M. y Abogada Integrante Claudia Candiani V. Santiago, diez de octubre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a diez de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TMDQXQJMZEL